



## Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL – SALA 4  
CPE 1076/2015/21/CFC5

**Registro N° 552/2024**

///la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de mayo del año 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbaño y Mariano Hernán Borinsky como Vocales, asistidos por el secretario actuante, se reúne a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto en la causa **CPE 1076/2015/21/CFC5**, caratulada "**P** , **A** **S** y **P** , **M** **F** s/recurso de casación", de la que **RESULTA:**

**I.** El 21 de septiembre de 2023, la Sala "A" de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de esta ciudad decidió, por unanimidad, confirmar la resolución apelada que dispuso el sobreseimiento en autos de **A** **S** **P** y de **M** **F** **P** (cfr. punto I) y, por mayoría, encomendó al juzgado de primera instancia "...según lo expuesto en el punto 'b' último párrafo del voto de los doctores Martín IRURZUN y Leopoldo BRUGLIA" (cfr. punto III).

En fecha 12 de julio de 2023, el señor juez titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 había dispuesto: "**I- DISPONER EL SOBRESEIMIENTO DE A** **S** **P** , de las demás condiciones personales obrantes en autos, en orden a las conductas descriptas en el considerando 4° -hechos 1, 2, 3, 9 y 10 de la presente- por las cuales se le recibiera declaración indagatoria, por no haber participado, aclarando que la formación de este proceso, con relación a los hechos indicados, no afectó el buen nombre y honor del que hubiere gozado el





## Poder Judicial de la Nación

nombrado (arts. 334, 335 y 336 inc. 4°, del C.P.P.N.). II-  
DISPONER EL SOBRESEIMIENTO DE M F P , de  
las demás condiciones personales obrantes en autos, en  
orden a las conductas descriptas en el considerando 4° -  
hechos 1, 2, 3, 9 y 10 de la presente- por las cuales se  
le recibiera declaración indagatoria, por no haber  
participado, aclarando que la formación de este proceso,  
con relación a los hechos indicados, no afectó el buen  
nombre y honor del que hubiere gozado el nombrado (arts.  
334, 335 y 336 inc. 4°, del C.P.P.N.)”.

**II.** Contra el pronunciamiento de la cámara a quo,  
interpuso recurso de casación el doctor Juan Carlos Otero,  
con el patrocinio letrado de los doctores Leandro Ariel  
Ventura y María Fernanda Cruz, en representación de la  
Unidad de Información Financiera (UIF), parte querellante  
en autos; el cual fue concedido en fecha 18 de octubre de  
2023 y oportunamente mantenido en esta instancia.

**III.** Tras efectuar una reseña de los antecedentes  
de las actuaciones, la querella consideró que el tribunal  
a quo incurrió en una inobservancia de la ley sustantiva  
"pues haciendo una valoración arbitraria de los elementos  
del tipo objetivo y subjetivo de la figura del delito de  
lavado de activos, dispone el sobreseimiento de los  
imputados, entendiendo que no se habría configurado dicho  
ilícito”.

Adujo que el delito previsto en el art. 303 del  
Código Penal resulta un delito autónomo cuyo bien jurídico  
protegido es el orden económico y financiero, y que no es  
necesario exigir una condena firme respecto al ilícito  
precedente para poder imputar esa figura penal.

La parte impugnante señaló, apoyándose en la  
presentación que hizo el señor fiscal de cámara con motivo

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

2

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

del recurso de apelación que interpuso la UIF -única apelante de la resolución de primera instancia-, que "lo que se lavó a través de las transferencias, no fue el dinero proveniente de las actividades lícitas llevadas a cabo por los P , sino el dinero que se generó a través de los delitos de contenido patrimonial cometidos por [S P ] C [...] En otras palabras: al haberle transferido dinero a P C a través del sistema financiero internacional, a cambio de recibir divisas en efectivo en el país, los P hicieron el aporte que aquel necesitaba para convertir dinero físico de procedencia ilícita en sumas depositadas en una cuenta bancaria y formalmente justificadas como transferencias recibidas de C S.A. y K I S.A."

En esa dirección, la recurrente sostuvo que los hermanos P no cometieron autolavado respecto de fondos generados por sus propias actividades o de los tributos impagos, sino que "...en todo caso el que autolavó fue C y que lo hizo junto con los P , que lavaron dinero de P C , no de ellos" - hipótesis que, según sostuvo, no fue debidamente analizada por el juez de grado-.

A lo anterior, la parte impugnante agregó que "aun cuando fuese cierto que el dinero de los P tuviera justificación en su actividad comercial lícita, ello no obstaría a la concretización del resultado de peligro concreto exigido por el tipo penal de lavado de activos, es decir la posibilidad de que la conducta en cuestión genere apariencia de licitud respecto de dinero que era ilícito ya por la actividad delictiva de C ". Agregó que, al efectuar dichas transferencias, los acusados a su vez realizaron conductas constitutivas del tipo





## Poder Judicial de la Nación

objetivo del delito de lavado de activos pues, a su criterio, tales transferencias fueron esenciales para que el circuito del lavado se completara y de esa manera, C terminara convirtiendo sus dólares "sucios" en "limpios".

Adujo que no solo quien tiene el dominio del hecho es penado por las conductas reprimidas en el art. 303 del Código Penal, sino que también todos aquellos que hayan prestado su colaboración para la perpetración de las maniobras, de conformidad con las pautas generales previstas para la participación criminal.

La UIF señaló que *"la imposibilidad de determinación de deuda que ha tenido el fisco respecto de los imputados no descarta que haya existido evasión pues como bien señalo el fiscal de Cámara surgiría que A S P , se acogió a la declaración voluntaria y excepcional prevista en la ley 27.260, siendo que dicha adhesión podría demostrar lo contrario"*.

Añadió que la conducta ilícita precedente resulta aquella por la cual C resultó condenado. En ese sentido, reiteró que no fue lavado el dinero proveniente de las actividades lícitas de los hermanos P sino aquel que generó C ilegalmente.

En lo que concierne al dolo requerido para la figura de lavado de activos, la querella sostuvo que el hecho de integrar sociedades comerciales y la experiencia de los imputados P en negocios financieros *"lleva a exigir una mayor prudencia a la hora de realizar transacciones económicas, teniendo en cuenta que contaban con las herramientas pertinentes para evitar formar parte de operaciones ilícitas o exigirle una mayor transparencia al agente bursátil que dicen optaron por contratar"*. Afirmó

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

4

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

que los imputados tenían conocimiento "sobre lo marginal de la operación que eligieron realizar en numerosas oportunidades", y consideró irrelevante que no se conocieran con S P C o que no supieran acabadamente el destino que aquel le daría al dinero recibido.

La impugnante alegó que la figura de lavado de activos admite dolo eventual, motivo por el cual, según su perspectiva, las manifestaciones de la defensa en cuanto a la falta de conocimiento no pueden repercutir en una falta de configuración del tipo subjetivo. A ello adicionó que "los hermanos P aportaron con las transferencias, hechos jurídicamente relevantes en el caso, en repetidas ocasiones con P y S P cuando existían numerosas cuestiones que indicaban que se estaban llevando a cabo maniobras de lavado de dinero, tales como; la interposición de sociedades off shore; el ocultamiento del real dueño del dinero; y la entrega en efectivo de importantes sumas de dinero sin justificación alguna". Aseveró que "el actuar sostenido en el tiempo por parte de los imputados permite tener por acreditado el aspecto tanto cognitivo como volitivo de su obrar doloso".

El recurrente criticó que se tomaran como elementos de convicción las declaraciones de los imputados "sin siquiera someterlas a crítica ni verificar si las inversiones realizadas con dinero producto de su actividad laboral lícita tienen un correlato fáctico con las transferencias y la posterior entrega de dinero en efectivo". Además, cuestionó lo declarado por los imputados al señalar que, si bien las transferencias de los hermanos P a S P C se habrían realizado por una necesidad de contar con divisas a partir de las





## Poder Judicial de la Nación

restricciones cambiarias, algunas de ellas tuvieron lugar en el año 2009, cuando no regían restricciones cambiarias.

En función de lo anterior, postuló que la cámara de apelaciones no evaluó la normativa cambiaria vigente en la época de los hechos que pondría en crisis la versión de los imputados. Por ello, tachó a la resolución bajo estudio de arbitraria por carecer, según su perspectiva, de fundamentación suficiente.

Seguidamente, la UIF consideró que el *a quo* no trató otras cuestiones dirimientes para la resolución del caso.

En esa dirección, adujo que en la intervención anterior de la cámara de apelaciones (resolución de fecha 26/10/2020 que revocó los sobreseimientos decretados en primera instancia respecto de los imputados, dictó sus faltas de méritos y ordenó la intervención de la AFIP), no se analizaron agravios de la parte querellante que *"iban más allá de la posible evasión efectuada por los imputados"*. Subrayó que, en dicha oportunidad, el recurrente había solicitado que se analice la posible participación de los nombrados en maniobras de lavado de activos ajenas, en las que C sería el autor principal y sindicó que tampoco se dilucidó la posible infracción a las regulaciones o controles bancarios que se establecieron a partir del año 2011 -más allá de las infracciones tributarias que podían involucrar a los hermanos P -.

El impugnante destacó que en la resolución recurrida el *a quo*, por mayoría, hizo lugar *"...al tratamiento de [su] planteo vinculado a la posible evasión de los controles cambiarios establecidos por el BCRA a través de la COMUNICACIÓN 'A' 5239 y de las resoluciones generales de AFIP n° 3210/2011 y n° 3212/2011"*. Al

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

6

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

respecto, consideró que dicho temperamento significó una contradicción en el razonamiento al confirmar los sobreseimientos en cuestión y seguidamente encomendar al juzgado de primera instancia que las actuaciones sean remitidas al Banco Central de la República Argentina (BCRA), por posible infracción cambiaria. En ese sentido, alegó: *"Resulta palmariamente contradictorio que la resolución por un lado confirme un sobreseimiento cuando al mismo tiempo le encomienda al juzgado que realice medidas tendientes que resolver planteos pendientes que infieren en la resolución de la situación de los imputados. Es difícil concluir que hay una certeza negativa para sobreseer si el mismo Tribunal es quien ordena sea examinado por la autoridad de aplicación"*.

Por último, el recurrente consideró que el pronunciamiento impugnado resulta contrario a los estándares nacionales e internacionales en la materia, establecidos en los diversos instrumentos jurídicos que el Estado argentino suscribió y que la parte reseñó.

En definitiva, por aplicación de la doctrina de la arbitrariedad, la parte querellante UIF solicitó que se case y se declare nulo el decisorio impugnado. Efectuó reserva del caso federal.

**IV.** En la etapa prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., no se hicieron presentaciones.

**V.** En la oportunidad establecida en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., la parte impugnante presentó breves notas ampliando fundamentos. La doctora María Fernanda Cruz, apoderada la Unidad de Información Financiera (UIF), adujo que la resolución recurrida incurrió en una inobservancia de la ley sustantiva, tras efectuar una valoración arbitraria de los elementos del





## Poder Judicial de la Nación

tipo objetivo y subjetivo de la figura del delito de lavado de activos.

Agregó que en el art. 303 del C.P., se prevé la comisión de un delito autónomo y reiteró que la hipótesis acusatoria postulada por su parte no se basaba en el autolavado de S P C , sino en el accionar de los hermanos P que posibilitó que el primero lavara dinero. Insistió con el deficiente tratamiento que, a su criterio, el a quo brindó sobre la configuración del dolo de los aquí acusados, por las circunstancias que precisó y que indicarían que ellos no podrían desconocer. Además, consideró que resta analizar la posible participación de los imputados en maniobras de lavado ajenas y las infracciones a los controles cambiarios que ellos mismos habrían cometido.

Finalmente, expresó que el decisorio impugnado contravino los estándares internacionales en la materia y por ello solicitó su casación y que este Tribunal disponga los autos de procesamiento de A S P y M F P . Efectuó reserva del caso federal.

**VI.** Superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas. Efectuado el sorteo de estilo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbaño y Gustavo M. Hornos.

El **señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:

**I.** Inicialmente, corresponde señalar que el recurso de casación interpuesto por la parte querellante (UIF) resulta formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas consideradas definitivas





## Poder Judicial de la Nación

(art. 457 del C.P.P.N.), la recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (art. 460 en función del art. 458 *ibidem*), los planteos esgrimidos se encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456, incisos 1° y 2° del código ritual, y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación requeridos por el art. 463 del mismo cuerpo legal.

**II.** A fin de imprimir un debido tratamiento al recurso bajo análisis corresponde, para mayor ilustración, efectuar una sucinta reseña de los antecedentes relevantes del caso.

Conforme surge de la resolución del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de esta ciudad, constituye objeto de investigación en estas actuaciones "... las diversas irregularidades en orden a actividades constitutivas del delito de lavado de activos, que se derivaron de la información remitida por la Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° turno de la Ciudad de Montevideo, R.O.U., en respuesta al exhorto internacional librado a las autoridades uruguayas en el marco de la causa N° 1502/2011 del registro de este Juzgado, la cual fuera recibida en oportunidad de encontrarse dicha investigación en la etapa oral y puesta en conocimiento de esta instancia tras la remisión de la sentencia recaída en los autos Nros. 2518, caratulados "C S F s/art. 303 inc. 3ro del C.P.".

En base a ello, se destacó que la fiscal María Gabriela Ruiz Morales formuló denuncia contra A S P , M F P , S P C y M Á P , en orden a la presunta intervención de aquéllos en maniobras que *prima*





## Poder Judicial de la Nación

*facie* serían constitutivas del delito de lavado de activos (art. 303 y cctes. del C.P.).

Se sostuvo que M            Á            P            acompañaba a C            en su automóvil al intentar egresar, el día 01/08/2011, del territorio nacional con la suma de ochocientos mil dólares estadounidenses (U\$S 800.000), conducta por la que el último fue condenado el 03/09/2015 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de esta Ciudad, mediante juicio abreviado (art. 431 bis del C.P.P.N.) a la pena de un (1) año y nueve (9) meses de prisión en suspenso, como autor del delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado (art. 303, inc. 3° del C.P.).

La fiscalía había entonces remarcado, haciendo suyas las consideraciones expuestas en la sentencia condenatoria dictada por el tribunal antes mencionado, que *"...se ha acreditado un entramado de sociedades tanto constituidas en nuestro país como en el exterior (Panamá, EEUU) -vgr. 'A            del S            LLC'; 'E            C            LLC', 'N            R            Inc', 'F            S.A', 'C            LLC', 'E            B            SA' - vinculadas de alguna manera al imputado y a su núcleo familiar y allegados dedicadas a inversiones de capital. Como ya se dijera con cita de un Tribunal Internacional, la existencia de estas sociedades o entramados financieros también pueden constituir pruebas suficientes en orden al lavado de activos. Consecuente con ello, entre otras variantes de puesta en circulación en el mercado de bienes, todas las operaciones de depósitos en moneda extranjera, compraventa de bienes muebles e inmuebles en dicho período por valores significativos en nuestro país o en el exterior, constitución de sociedades*

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

10

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

*o movimiento de fondos resultan sospechosas a la luz del delito de lavado de activos (arts. 278 o 303 del CP)".*

De esa forma y a pedido del Ministerio Público Fiscal, se inició la instrucción del presente sumario, adoptándose diversas medidas cautelares respecto a los imputados A S P y M F P .

Con fecha 8 de febrero de 2019, se convocó a los imputados P a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del C.P.P.N., oportunidad en la que ambos presentaron un descargo por escrito (cfr. páginas 2/8 del fallo de primera instancia).

Los hermanos P fueron indagados por haber integrado "una estructura mediante la cual se habrían adquirido, administrado y vendido bienes, como así también transferido y canalizado importantes sumas de dinero hacia el extranjero, todos ellos provenientes de un origen espurio, pues habrían sido el producto de conductas ilícitas, en el orden patrimonial, en las que habría intervenido S P C , constitutivas, entre otros, de los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta, estafa procesal, falsificación de documento privado y prevaricato". Se añadió que "las maniobras realizadas se habrían llevado a cabo mediante la conformación de sociedades 'off shore' y la apertura de cuentas bancarias, en ambos casos, en el exterior y sin conocimiento del fisco nacional".

Los hechos que concretamente se les imputaron a los hermanos P fueron descriptos de la siguiente manera:

"HECHO 1. S F C se habría valido de una sociedad off shore ('fantasma'), formada inicialmente en la República de Panamá, llamada 'N





## Poder Judicial de la Nación

R INC.', para la apertura de una cuenta bancaria ante el HSBC Bank Uruguay S.A., el 14 de diciembre de 2010.

Dicha cuenta fue individualizada con el N° 3, teniendo al nombrado como apoderado y beneficiario.

A su vez, la persona jurídica utilizada habría sido creada el 9 de noviembre de 2010, en la ciudad de Panamá, por el agente residente/estudio jurídico 'Morgan & Morgan', ocasión en la cual se designó como presidente, secretario y tesorero a los ciudadanos panameños J E. S, D M. de O y M de S, respectivamente.

Asimismo, con posterioridad, el 3 de diciembre de 2010, las autoridades referidas renunciaron a sus cargos y, en reemplazo de aquéllas, asumieron S P C, como director/presidente; R M C, como directora/tesorera; y H M R, como director/secretario.

Además, en esa oportunidad, se expidió un poder general a los dos primeros para disponer libremente de los bienes de la sociedad, tanto en Panamá, como en el extranjero, el que habría sido utilizado a los fines de la apertura de la cuenta bancaria reseñada supra.

Por su parte, a partir de la apertura de la cuenta, se habría detectado un importante flujo de ingreso y egreso de dinero en aquélla, tal como surge del siguiente detalle

(...)

Cabe destacar que varias de las transferencias identificadas en el cuadro precedente, que tuvieron a N R INC. como beneficiaria, fueron realizadas

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

12

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORROS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

desde cuentas bancarias de A S F o bien de la firma C S.A., destacándose que el nombrado habría sido el presidente de dicha empresa.

HECHO 2. S P C habría abierto, el 19 de enero de 2009, ante el HSBC Bank Uruguay S.A., la cuenta N°, en la que compartía la titularidad con su ex esposa, M L S.

Según lo informado por la entidad referida, los titulares de esa cuenta bancaria habrían sido beneficiarios de:

a) una transferencia bancaria por la suma de U\$S 100.000, de parte de la firma 'C S.A.' formalizada el 14 de agosto 2009; y

b) una transferencia bancaria por la suma U\$S 40.000, de parte de la firma 'K I S.A.', fechada el 16 de julio de 2009, en la que habría intervenido M F P (D.N.I. N° ) como ordenatorio de la cuenta de la mentada sociedad.

La primera de las firmas mencionadas se encontraría vinculada a A S F, mientras que la última tendría vinculación con el nombrado y con M F P.

HECHO 3. S P C habría abierto, el 9 de septiembre de 2010, ante el HSBC Bank Uruguay S.A., la cuenta N°, de la cual era titular, junto con su hija, R M C.

En la referida cuenta se registró el ingreso y egreso de sumas de dinero, de conformidad con el siguiente detalle:

(...)

Es dable subrayar que, tal como surge del cuadro precedente, cinco de las seis transferencias





## Poder Judicial de la Nación

identificadas, que tuvieron a S P C como beneficiario, fueron realizadas desde una cuenta bancaria de la firma C S.A., destacándose que A S P habría sido el Presidente de la misma;

HECHO 9. M Á P habría sido el receptor de, por lo menos, ocho transferencias bancarias de parte de la firma 'C S.A.', cuya presidencia se encontraba a cargo de A P, totalizando un monto de U\$S 315.000, desde una cuenta del Banco Credit Uruguay (actualmente, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Uruguay S.A.), las cuales tuvieron como destino entidades bancarias ubicadas en los Estados Unidos de América, de acuerdo al detalle que se anexa.

(...)

Las mentadas transferencias habrían posibilitado que el empresario A S. P O, Presidente de la firma C S.A., con sede en la República Oriental del Uruguay, capitalizara en el exterior los dividendos de su actividad comercial, sin haber puesto en conocimiento de ello al fisco nacional y/o a su par uruguayo.

En ese orden, debe destacarse que no consta en sus declaraciones juradas referencia alguna a la apertura de cuentas o a la conformación de sociedades comerciales en aquel país; y, por otro lado, de los informes proporcionados por las autoridades uruguayas, surge que la empresa de mención no presentó declaraciones juradas, desde su constitución, y, posteriormente, fue disuelta por la D.G.I. de ese país;

HECHO 10. A S P y M F P habrían utilizado la fachada de las dos sociedades 'off shore' ya mencionadas (es decir, C





## Poder Judicial de la Nación

S.A. y K I S.A.), radicadas en la República Oriental del Uruguay, para la administración y capitalización del producido de su actividad comercial en este país, desviando esos recursos hacia diversas cuentas bancarias abiertas en el extranjero, ocultando y disociando de esa forma su patrimonio ante el fisco nacional.

En ese sentido, cabe señalar que, en ambos casos, las personas jurídicas utilizadas habrían sido conformadas al sólo fin de recibir y emitir transferencias dinerarias en aquel país, sin que se haya registrado en aquéllas actividad alguna o la existencia de declaraciones juradas ante las autoridades uruguayas que demostrara una labor en ese territorio. A su vez, ambas empresas fueron disueltas por la D.G.I.

Asimismo, los nombrados habrían tenido el aporte necesario del agente de bolsa M Á P , quien habría sido el receptor de algunas de las transferencias dinerarias realizadas, como así también quien les habría indicado a aquéllos los destinatarios a quienes debían enviar las sumas de dinero en cuestión”.

El señor juez en lo penal económico interviniente recordó que, en fecha 26 de septiembre de 2019, dispuso el sobreseimiento de los imputados P ; decisión que, recurrida por el Ministerio Público Fiscal y la querella (UIF), fue revocada por la cámara a quo en fecha 26 de octubre de 2020.

En lo medular, el colegiado de la instancia previa sustentó la precitada decisión ante el cuadro imperante y así estimó la inexistencia de certeza negativa que requiere el dictado el temperamento previsto en el art. 336 del código de rito. En efecto, sostuvo que los





## Poder Judicial de la Nación

sobreseimientos decretados por el juez de grado eran prematuros, al señalar que "...la ausencia de denuncia penal por parte del organismo recaudador no brinda la certeza necesaria para determinar el origen, lícito o no, del dinero de que se trata. Por el contrario, el hecho de que la actividad que los hermanos P realizaron por intermedio de las mencionadas sociedades, relacionada con S P C y con M Á P, se haya efectuado omitiendo su declaración ante la A.F.I.P. sustenta la hipótesis del fiscal de la instancia anterior y justifica las medidas propuestas por dicho Ministerio en cuanto a que debe darse intervención a dicho organismo recaudador con el fin de descartar una posible maniobra de evasión tributaria".

La cámara de apelaciones a ello añadió, previa cita de un caso que consideró análogo, que "...a los fines de la investigación podría resultar pertinente y útil la realización de la medida solicitada por el representante del Ministerio Público Fiscal en la instancia anterior por el recurso de apelación interpuesto, referida a la necesidad de la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines de determinar una posible maniobra de evasión tributaria por parte de los imputados, lo que podría sustentar la hipótesis...".

En concreto, el a quo consideró necesario determinar si el dinero transferido por los hermanos P por intermedio de las sociedades "K S.A." y "C S.A." relacionadas con S P C y M Á P, respectivamente, al haberse supuestamente omitido su declaración ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), podría tener como fuente la comisión de delitos tributarios; esto es,

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

16

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

supuesta evasión tributaria como ilícito penal precedente del delito lavado de activos que fuera imputado.

En función de ello, el juez de grado decretó en fecha 18 de febrero de 2020 la falta de mérito para procesar o sobreseer a los imputados P en los términos del art. 309 del C.P.P.N. y dispuso que la AFIP practique la determinación de oficio prevista en el art 18 del Régimen Penal Tributario respecto de los nombrados con relación a los períodos comprendidos.

En respuesta a lo solicitado, la AFIP finalmente informó sobre M F P que: "Con respecto a la información obrante en las bases informáticas del organismo no es posible cuantificar pretensión fiscal alguna en los periodos e impuestos bajo análisis, tampoco surge información relevante de la vista al expediente que se efectuó por los actuantes en la sede del Juzgado en lo Penal Económico N° 2 - Secretaría N° 3. Es válido aclarar que las tareas de fiscalización son tareas preparatorias para el acto determinativo, no son actos determinativos. Es menester mencionar que, en materia fiscal, existe la figura de la prescripción de impuestos detallada en el artículo 56 de la Ley N° 11.683... En este caso habría periodos que gozarían de la prescripción emanada de la normativa transcripta (...)".

En lo que concierne a la situación de A S P, el organismo recaudador informó: "Sin perjuicio de todo lo expuesto, cabe destacarse que se verificó que el contribuyente del asunto ha presentado ante esta AFIP la declaración voluntaria y excepcional de bienes establecida en la Ley 27.260. En este punto, y conforme lo estipulado en el artículo 46 de la mencionada ley, se aclara que si bien éste dispone que no estarán





## Poder Judicial de la Nación

*sujetos a lo dispuesto por el artículo 18, inciso f), de la ley 11.683 (t.o. 1998) y sus modificaciones, con respecto a las tenencias declaradas; tampoco se observan elementos fehacientes que permitan invalidar la inclusión en el régimen de sinceramiento mencionado. Por todo lo expuesto, con los elementos reunidos y teniendo en cuenta las limitaciones del caso, no surgen elementos que permitan arribar a una determinación de oficio conforme lo previsto en el artículo 18 del Régimen Penal Tributario respecto del contribuyente del asunto”.*

Tras cumplir con la medida indicada por la cámara de apelaciones, el señor juez de grado recordó que al momento de contestar la vista del art. 180 del C.P.P.N., el Ministerio Público Fiscal circunscribió la investigación al delito de lavado de activos de origen ilícito previsto y reprimido en el art. 303, inciso 1° del Código Penal.

Luego de brindar argumentos y citar doctrina sobre la figura penal en cuestión, el señor juez de primera instancia destacó que los imputados A S P y M F P , al formular sus descargos, declararon que registraban una actividad comercial declarada, que son titulares de diversas cuentas bancarias en entidades conocidas dentro y fuera del país, y que además integraban sociedades comerciales. En cuanto a las transferencias realizadas, los acusados manifestaron que poseían en el exterior negocios vinculados a la exportación con origen y destino lícitos. El señor magistrado interviniente remarcó que los imputados hicieron referencia a que tenían negocios en Argentina y en el exterior, dedicados a la fabricación y exportación de bienes e insumos de contenido tecnológico, en gran parte destinados a la industria de laboratorios.

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

18

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

De esa forma, el juez de grado consideró que los hermanos P "no buscaron enmascarar, disociar, convertir, administrar, vender, gravar o formalizar con alguna maniobra de lavado de activos, sus ganancias lícitas durante aquel período y que la utilización de las sociedades comerciales constituidas en el Uruguay (K y C ), se debió a las mejores condiciones que les brindaba tener una empresa subsidiaria en ese país, tanto para realizar pagos a los proveedores del exterior, como así también para recibir aquéllos; todo ello, en el marco de las diferentes operaciones de importación y exportación de mercaderías realizadas por los nombrados, en su actividad laboral lícita, bajo la figura de 'TRADER'". Agregó que "...se observó a lo largo del sumario que las transferencias bancarias emitidas por aquellas sociedades hacia cuentas abiertas en el Uruguay, vinculadas a S P C , habrían sido meramente circunstanciales y por un beneficio puntual, advirtiéndose que mediante las mismas los imputados no habrían querido convertir ganancias espurias en dinero lícito, sino que habrían actuado, conforme las directivas dadas por el agente bursátil M P , para obtener dinero efectivo (físico) en este medio, el cual se encontraba destinado para realizar inversiones".

Sucesivamente, el juez de primera instancia sostuvo que "el dinero transferido por los hermanos P tenía su origen en actividades comerciales lícitas y con el fin de hacerse de divisas físicas por intermedio de un agente bursátil autorizado".

Destacó que las personas jurídicas "K I S.A." y "C S.A." fueron constituidas en la ciudad de Montevideo, en los años 2001 y 2004,





## Poder Judicial de la Nación

respectivamente. Y que fueron disueltas de pleno derecho el 30 de enero de 2015 por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 19.288 de la República Oriental del Uruguay (disolución de pleno derecho de las sociedades anónimas allí radicadas que no informaran en el plazo establecido, la obligación de información los titulares que representen el %50 de su capital). A lo anterior, adicionó que entre los documentos aportados por la defensa se observa la facturación que realizaron las empresas en cuestión durante los años 2009, 2010 y 2011, de lo que surge la actividad desarrollada y el origen de los fondos de las transferencias investigadas.

En definitiva, el señor juez de grado afirmó que, tras la realización de las medidas encomendadas por la cámara de apelaciones, no se había podido constatar la hipótesis del fiscal y, consecuentemente, no podía afirmarse que los fondos cuestionados provenían de una actividad delictiva.

A ello se agregó: *"se ha podido constatar que las mentadas transferencias que son materia de discusión en la presente, en las cuales habrían tomado parte los P , por intermedio, en algunos casos, de las sociedades K I y C , no habrían tenido como objetivo transformar ganancias espurias en activos legales, sino el valerse de efectivo para poder realizar inversiones dentro de las empresas familiares que los nombrados tenían en el país y por la cual necesitaban las divisas"; y que "...la intervención de A P y M P no habría significado ninguna operación de 'maquillaje' o de simulación del origen de esos fondos, ya que los nombrados reconocieron las transferencias, acreditaron el flujo de las actividades comerciales de sus empresas y acompañaron*

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

20

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNOS, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

*documentación comercial que respaldaran sus dichos, no existiendo en las transferencias cuestionadas personas ni sociedades interpuestas tendientes a ocultar los verdaderos dueños de estas operaciones".*

El magistrado tuvo en cuenta que al momento de prestar declaración indagatoria, los hermanos P manifestaron que no conocían ni tenían vínculo alguno con S P C . Y que de las certificaciones solicitadas respecto de los expedientes en los que se encontraba investigado C "no surge que A y M P , ni las empresas que los mismos controlaban, tuvieran relación con el nombrado".

En función de lo anterior, el juez de grado concluyó: "habiéndose descartado que la intervención de A P y M P habría tenido su origen en una maniobra de evasión tributaria que podría enmarcarse como delito precedente dentro del tipo penal en estudio (Art. 303 inc. 1 del C.P.), dado que los fondos que fueron transferidos por los nombrados no habrían provenido de un ilícito, y que, a la fecha, se encuentra agotada la labor de investigación a sus respectos, este juzgado se encuentra en condiciones de expedirse, de conformidad con las previsiones del artículo 334 y ccdtes. del C.P.P.N.". De esa forma, sobreseyó a los imputados P en los términos del art. 336, inc. 4° del C.P.P.N.

Apelado que fuera dicho pronunciamiento exclusivamente por parte de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, por unanimidad, confirmó el decisorio en fecha 21 de septiembre de 2023 y, por mayoría, encomendó al juzgado nacional interviniente que se le brinde intervención al Banco Central de la República





## Poder Judicial de la Nación

Argentina (BCRA) ante lo que estimaron correspondía constituir una posible infracción a la ley 19.359.

Al respecto, no consideraron la existencia de la causal de arbitrariedad que invocó el impugnante.

Para así decidir, el señor camarista que votó en primer término destacó que, a diferencia el anterior pronunciamiento mediante el cual se revocaron los sobreseimientos de A S P y M F P, habiéndose agotado ahora la investigación sobre la posible comisión de delitos tributarios como ilícitos precedentes susceptibles de ser lavados en los términos del art. 303, inc. 1° del C.P., correspondía confirmar los nuevos temperamentos desvinculantes.

El magistrado añadió que no existen, ni siquiera de manera indiciaria, elementos probatorios que logren presuponer que los nombrados *"...estaban en conocimiento o debían haberlo estado, del origen espurio del dinero que P les habría entregado para que fuera transferido a las cuentas de las sociedades que se investigan [ni] cuál sería el hecho ilícito del que provendrían dichos fondos"*. Agregó que quedó comprobada la solvencia fiscal de los imputados y que el dinero depositado en las aludidas cuentas bancarias en dólares que los acusados tenían en la República Oriental del Uruguay, tenía origen lícito producto de la actividad comercial que los imputados realizaron durante años, vinculada al rubro de la industria farmacéutica. A ello aunó que las partes acusadoras tampoco pudieron acreditar sospecha alguna sobre la posible vinculación de los hermanos P con S P C, lo que descartaría toda vinculación subjetiva, incluso a título de dolo eventual.





## Poder Judicial de la Nación

Por último, el camarista preopinante subrayó que *"...no se han incorporado nuevos elementos probatorios que corroboren la participación de los imputados en el hecho que se les atribuyó"* y concluyó que *"[e]n esas condiciones, no puede admitirse que la decisión apelada sea prematura si se tiene en cuenta el plazo que ha demorado la instrucción, en cuyo transcurso no pudo corroborarse la hipótesis que la querellante afirma, por lo que el temperamento adoptado se encuentra ajustado a derecho"*.

En el mismo sentido, el voto conjunto de los restantes integrantes de la cámara a quo reputó la inexistencia de los motivos invocados por la parte impugnante para invalidar la resolución apelada. Estimaron que independientemente del acierto, o no, del temperamento seguido por el juez de primera instancia, allí se indicaron los fundamentos de la solución. De modo que concluyeron que la querella expresó en su recurso de apelación, una mera discrepancia con el criterio otrora adoptado que, adunaron, obtuvo debida respuesta.

En particular, los magistrados destacaron que ha sido luego del avance de la pesquisa que la propia cámara de apelaciones anteriormente indicó, que luego de la prosecución de la investigación se pudo determinar la ajenidad de S A P y M F P en los hechos de autos. Al respecto, expresaron que: *"...de los informes practicados por las Direcciones Regionales Sur y Centro de la AFIP con relación a M y A P mediante los cuales, por los motivos allí señalados, no se determinó deuda en los términos del art. 18 de la ley 11.683 (t.o.1998 y sus modificaciones), aunado a los oportunamente arrimados a la instrucción, y*





## Poder Judicial de la Nación

lo correctamente valorado sobre el punto por el a quo, no se desprenden elementos que a esta altura lleven a acreditar la evasión como delito precedente al lavado de activos investigado. Con relación a esto último, las hipótesis expuestas por el recurrente no encuentran anclaje en las constancias colectadas, a la vez que tampoco surgen elementos que desvirtúen lo alegado en torno al desconocimiento sobre el presunto origen ilícito de las divisas obtenidas de parte de P por las transferencias detalladas por el Magistrado de la anterior instancia. Nótese que ambos encartados negaron conocer al coimputado C -circunstancia no revertida-, en tanto el mero vínculo con el operador bursátil P no resulta suficiente para sostener la posición del apelante quien, por otra parte, tampoco ha sugerido la producción de diligencia alguna en pos de ello”.

**III.** De la breve efectuada surge que la parte recurrente (UIF) no brindó en su recurso de casación, razones suficientes que posibiliten refutar lo resuelto en las instancias previas, ni propuso la realización de medidas de prueba pendientes, o aportó algún elemento que permita advertir que lo resuelto por el juez de primera instancia y confirmado por los magistrados de la instancia precedente, resulte errónea interpretación y aplicación de la ley sustantiva. Tampoco se advierte un déficit de fundamentación que conlleve su reconsideración como acto jurisdiccional válido (art. 123 del C.P.P.N.).

Las discrepancias expuestas, más allá de evidenciar la existencia de una fundamentación que no comparte, resultan insuficientes para demostrar la arbitrariedad que invoca en su recurso de casación, toda vez que no ha brindado argumentos suficientes ni novedosos





## Poder Judicial de la Nación

para demostrar error o desacierto en el decisorio impugnado.

De la lectura de la resolución recurrida se advierte, pese a lo expuesto por la querella, que allí se brindó debido tratamiento a los agravios esgrimidos por la parte recurrente en su recurso de apelación, sin que se aprecie un apartamiento palmario al derecho aplicable conforme las constancias de la causa.

Como ha sido previamente precisado, a A S P y M F P oportunamente se les atribuyeron cinco (5) hechos -enunciados como "1", "2", "3", "9" y "10"- . En los primeros cuatro de ellos, se les endilgó, respectivamente, que efectuaran transacciones en dólares desde sus cuentas radicadas en bancos de la República Oriental del Uruguay -sea mediante cuentas a su nombre o de sociedades a ellos vinculadas- a cuentas relacionadas con S P C o M Á P n, por los montos y durante los lapsos descriptos. El hecho restante, se relacionó con el uso de las empresas y cuentas existentes en el país vecino.

Sucintamente, en el denominado "hecho 1", se le reprocharon cinco (5) transferencias realizadas entre el 09/02/2011 y el 10/03/2011 por un total de U\$D 220.260; en el "hecho 2", dos (2) transferencias adjudicadas a A S P y M F P , de fechas 16/07/2009 y 14/08/2009 por un total de U\$D 140.000; en el "hecho 3", a A S P , cinco (5) transferencias entre el 10/12/2010 y el 04/01/2011 por un total de U\$D 245.000; y en el "hecho 9", a A S P , siete (7) transferencias entre el 25/10/2010 y el 01/03/2012 por un total de U\$D 295.000. Por último, en el "hecho 10" no se atribuyen transferencias sino el empleo de





## Poder Judicial de la Nación

dos cuentas *off shore* en dólares en Uruguay a nombre "C S.A." y "K I S.A." -vinculadas a A S P y M F P, respectivamente- para depositar allí, administrar y capitalizar, ganancias supuestamente obtenidas en Argentina pero ocultándoselo al fisco nacional; cuentas desde las que a su vez se habría transferido dinero -sin especificar-. Para ello, ambos habrían contado con la participación de M Á P.

Tal como ha sido precisado en el acápite anterior, en la segunda revisión que efectuó la cámara a quo, ha quedado descartada la posibilidad de un autolavado de los imputados A S P y M F P (art. 303, inc. 1° del C.P.), a quienes se los investigó en orden a si el dinero depositado en las cuentas bancarias en cuestión, sería producto de delitos tributarios. En efecto, durante la pesquisa primero se determinó la licitud de los fondos, y luego -a partir de la reseñada resolución de la cámara a quo de fecha 26/10/2020- específicamente también quedó descartada la hipótesis acusatoria en orden a que mediante las transferencias bancarias se hubiera pretendido lavar dinero cuyo ilícito penal precedente fuese alguna infracción a la ley penal tributaria. Debe remarcarse que, este punto no ha sido cuestionado por la parte recurrente.

El impugnante pretende ahora, mediante su remedio recursivo, cuestionar el temperamento judicial establecido en ambas instancias que determinó la ajenidad de los acusados respecto a posibles maniobras vinculadas al delito de lavado de dinero (art. 303, inc. 1° del C.P.), con un diverso enfoque que implicó, según se advierte del recurso de casación, una mutación de la hipótesis imputativa.





## Poder Judicial de la Nación

Habiéndose descartado la intervención de los hermanos P en maniobras de autolavado -demostrándose en autos primero la licitud de los fondos y luego que no sería dinero producto de ilícitos tributarios-, la querella pretende ahora, mediante un distinto enfoque legal, mutar la acusación hacia una eventual participación criminal en el lavado de otro coimputado, S P C , con la intermediación a su vez de M Á P . Para ello, adujo que C ha sido condenado por el delito de lavado.

Sin embargo, cabe reiterar -como ya fue precisado- que en el marco de la causa CPE 1502/2011/TO1, mediante sentencia del 03/09/2015, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de esta ciudad, mediante juicio abreviado (art. 431 bis del C.P.P.N.), condenó a S P C a la pena de un (1) año y nueve (9) meses de prisión como autor del delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado (303, inc. 3° del C.P.). Así, la comisión del delito en cuestión por quien es condenado en carácter de autor, por definición, excluye la figura del autolavado (art. 303, inc. 1° del C.P.).

Por lo tanto, la parte querellante no explicita en su libelo recursivo, cómo podrían A S P y M F P ser partícipes de un supuesto autolavado de C , siendo que éste ha sido condenado -con sentencia firme-, por haber recibido a su vez de un tercero, dinero de origen ilícito para su posterior lavado. Tampoco esgrimió ninguna participación en cadena o un supuesto concursal que permita conmover lo decidido por el señor juez de grado y la cámara de





## Poder Judicial de la Nación

apelaciones, ni efectuó un mínimo análisis sobre las fechas de las transacciones dubitadas y la detención de C y P, que permitan inferir que el dinero incautado en la causa CPE 1502/2011/TO1 tuviera vinculación con los hermanos P.

Además, durante los años que insumió la instrucción no se recabó ninguna prueba concreta de que A S P y M F P conocieran a C. Los dichos aislados del impugnante no alcanzan ni siquiera a un indicio y, en la versión que pretende ahora esbozar, se omite precisar que el dinero que ellos habrían recibido, les habría sido entregado físicamente por el agente de bolsa P, quien fue sobreseído en la precitada causa.

De modo que la parte acusadora tampoco logra evidenciar porqué razón los empresarios P podrían haber querido prestar colaboración en el lavado de dinero ajeno proveniente de ilícitos penales, si por el contrario se probó que el dinero que transfirieron a C tenía origen legal y era propio. El cuadro probatorio reunido no permite inferir que los hermanos P tuvieran conocimiento de C ni que éste pretendiera lavar dinero ajeno o propio. De manera que, frente al desconocimiento constatado de los acusados respecto a C y -tal como estableció el a quo- no existiendo pruebas que logren desvirtuar los dichos de los imputados, el impugnante no expone sobre qué construcción teórica se permite invocar un supuesto dolo eventual, ya no sin aspecto volitivo, sino sin conocimiento.

Debe precisarse que el aspecto cognoscitivo del dolo recae sobre los elementos del tipo objetivo que se trate; la simple alusión a que los acusados son hombres de

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

28

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

negocios y/o que debieron presuponer que P o la sociedad de bolsa en la que se desempeñaba podía a su vez ayudar a otro a lavar dinero, no autoriza a invertir el razonamiento ni mucho menos la carga probatoria que pesa sobre las partes acusadoras -en este caso, la querella es la única parte recurrente-.

Cabe memorar que se acreditó que A S P y M F P , solamente interactuaron con el agente de bolsa P , por los servicios financieros que les brindaba. Las razones esgrimidas por los hermanos P para supuestamente hacerse en nuestro país de billetes de moneda extranjera a un tipo de cambio más favorable, no constituye el objeto procesal de autos.

Lo expuesto evidencia que el pretendido nuevo enfoque que postula la UIF, no significa un distinto encuadre legal sino que en el fondo conlleva una modificación de la plataforma fáctica que constituye materia de acusación -de autolavadores a partícipes necesarios del supuesto autolavado de quien se halla condenado por recibir dinero de un tercero para lavarlo-. En este punto debe recordarse que, el dictado de un sobreseimiento en los términos del art. 336, inc. 4° del código ritual, versa sobre hechos concretos -no por calificaciones legales-.

Por ello, el impugnante no ha brindado razones con entidad suficiente para conmover lo resuelto y tampoco ha aportado en sus presentaciones, medidas de prueba pendientes de realización, elementos novedosos, ni argumentos válidos que permitan superar el estado de probabilidad negativa de la hipótesis imputativa formulada contra A S P y M F P (cfr. C.F.C.P., Sala IV, en lo pertinente y aplicable, el





## Poder Judicial de la Nación

criterio sostenido por el suscripto en causa n° 15.427, "González Ramiro s/ recurso de casación", reg. n° 1255/12, rta. 02/08/2012; reiterado en causas n° 16.190, "Tonello Gustavo Martín s/ recurso de casación", reg. n° 690/13.4, rta. 16/05/2013, CFP 13345/2012/7/CFC2, "Salazar, José Luis Mingo y otros s/ recurso de casación", reg. n° 285/18.4, rta. 09/04/2018; FCR 15027/2017/CFC1, "Millán, Moira Ivana s/ recurso de casación", reg. n° 2542/19.4, rta. 05/12/2019 y causa FTU 23105/2015/CFC2, "Soria Luis y otros s/ recurso de casación", Reg. n° 17/20.4, rta. el 06/02/2020 y FSM 12096/2013/14/CFC1, "Saccani, Paula Virginia y otros s/recurso de casación", reg. n° 122/2021, rta. 25/02/2021, entre otras).

En tales condiciones, la UIF se limita a exponer su propia perspectiva sobre el caso y el modo en que a su juicio debe ser resuelto, aunque no ha brindado argumentos suficientes para demostrar error o desacierto en el razonamiento seguido en las instancias anteriores y poner en evidencia la arbitrariedad que alega; defectos que, vale aclarar, tampoco se advierten.

El colegiado de la instancia previa, en su inteligencia, realizó un tratamiento concreto y pormenorizado sobre las particularidades del caso y descartó la intervención de los acusados en los hechos investigados, a través de un razonamiento lógico y crítico de los distintos elementos de prueba incorporados al legajo, lo que llevó a confirmar el sobreseimiento dispuesto a su respecto de conformidad con lo previsto en el artículo 336, inciso 4° del Código Procesal Penal de la Nación.

Por su parte, al confirmar el sobreseimiento dispuesto en primera instancia, se satisfizo el doble

Fecha de firma: 28/05/2024

Alta en sistema: 29/05/2024

30

Firmado por: MARIANO HERNAN BORINSKY, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: CARLOS JAVIER CARBAJO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: GUSTAVO MARCELO HORNO, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

Firmado por: MARCOS FERNANDEZ OCAMPO, SECRETARIO DE CAMARA



#38099702#413758090#20240528132307143



## Poder Judicial de la Nación

conforme, en una resolución adversa que luce incólume ante los embates vertidos en el recurso de casación bajo análisis. Por lo demás, cabe destacar que el decisorio impugnado no ha sido recurrido por el Ministerio Público Fiscal.

Por último debe recordarse que, aunque se confirmó la decisión que dispuso los sobreseimientos en cuestión, el *a quo*, por mayoría, no descartó que los hechos que constituyen el objeto procesal en autos, no puedan eventualmente configurar una infracción cambiaria en los términos establecidos en la ley 19.359, motivo por el cual, encomendaron al señor juez de primera instancia que diera intervención a la respectiva autoridad de aplicación -Banco Central de la República Argentina (BCRA)- (cfr. punto III de la resolución impugnada, que no ha sido recurrido).

De los fundamentos brindados en la resolución recurrida al respecto, surge que los señores camaristas precisaron, que: "[e]n lo atinente a la -ahora introducida- presunta infracción al Régimen Penal Cambiario, y sin perder de vista lo informado por la A.F.I.P. respecto de A P y lo reglado por el art. 46 inc. 'b' de la ley 27.260, encontramos que en su caso, tal supuesto deberá ser examinado por la autoridad de aplicación, Banco Central de la República Argentina (ver Decreto 480/95 que aprueba el ordenamiento de la Ley 19.359 y art. 5° de ésta), entidad a la que habrá de darse intervención, a sus efectos".

El temperamento adoptado en este punto por la mayoría del tribunal *a quo*, fue sindicado por el impugnante como una auto contradicción en el que habrían incurrido los respectivos magistrados. El recurrente entendió que si se consideraba la necesidad de dar intervención al BCRA, ello





## Poder Judicial de la Nación

evidenciaría -a su entender- que los hechos bajo análisis debían seguir investigándose.

Sin embargo, no se advierte la arbitrariedad denunciada pues lo dispuesto en el punto III -no recurrido por el impugnante-, no conmueve el debido raciocinio seguido por los jueces que emitieron conjuntamente su voto al confirmar los sobreseimientos aludidos. El criterio expuesto por los señores camaristas en orden a una posible infracción cambiaría, en modo alguno conmueve el razonamiento que, por unanimidad, el *a quo* adoptó al confirmar la ajenidad constatada de A S P y M F P en los hechos aquí investigados (art. 336, inc. 4° del C.P.P.N.), relacionados con posibles maniobras de lavado de dinero; otrora autolavado y ahora, en la nueva hipótesis acusatoria de la parte querellante, por una eventual participación criminal en el lavado de un tercero.

La desvinculación de los nombrados de autos, por supuestas maniobras relacionadas con lavado de dinero por los que fueron acusados, resulta independiente de la substanciación, o no, de una eventual investigación en torno a posibles infracciones a la ley 19.359. Por lo demás, cabe destacar que en su recurso de apelación, la UIF puntualmente se agravió que la resolución de primera instancia que dispuso -por segunda vez- el sobreseimiento de los hermanos P , no analizó la "operación marginal" relacionada con la "elusión de controles cambiarios mediante el denominado 'dólar cable'". De modo que, en su caso, lo decidido al respecto ha sido de conformidad con lo peticionado.

En síntesis, la sentencia impugnada constituye una derivación razonada del derecho vigente con aplicación





## Poder Judicial de la Nación

de las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 295:316; 298:21; 300:712; 305:373; 320:2597; 325:1731; 327:2273; 331:1090 y sus citas), sin que los embates del recurrente conmuevan el temperamento debidamente seguido por la cámara de apelaciones. La decisión recurrida cuenta, además, con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:888, entre muchos otros).

Cabe recordar que la doctrina sobre la arbitrariedad posee un carácter estrictamente excepcional y exige, por tanto, que medie un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta carencia de fundamentación (Fallos: 295:140, 329:2206 y sus citas; 330:133, entre otros). De allí que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de modo reiterado que dicha doctrina no es invocable en tanto la sentencia contenga fundamentos jurídicos mínimos que impidan su descalificación como acto judicial (Fallos: 290:95; 325:924 y sus citas, entre otros), déficit que, vale señalar, no ha sido demostrado, ni se advierte conforme las consideraciones desarrolladas a lo largo de este acápite.

**IV.** Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por Unidad de Información Financiera (UIF), parte querellante en autos; sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 *in fine* del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal.

El **señor juez Javier Carbajo** dijo:

**I.** Doy por reproducidos, en mérito a la brevedad, los antecedentes del caso reseñados por el colega que me precede en el Acuerdo, doctor Mariano Hernán Borinsky.





## Poder Judicial de la Nación

**II.** Disiento, sin embargo, respecto al temperamento que cabe adoptar frente al recurso interpuesto, pues entiendo que el sobreseimiento dictado no se ajusta al estado de certeza negativa exigible para dicha solución.

En su impugnación, la querella remarcó que "...lo que se lavó a través de las transferencias, no fue el dinero proveniente de las actividades lícitas llevadas a cabo por los P , sino el dinero que se generó a través de los delitos de contenido patrimonial cometidos por C ".

En oportunidad de presentar breves notas ante esta Cámara, puntualizó que el dinero espurio sería aquél que C generó "...a través de los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta, estafa procesal, falsificación de documento privado y prevaricato (de conformidad con lo imputado al nombrado en el marco de las causas N° 17.204/2010;14.162./2011, 73.770/2013 y 39.847/2009, que tramitan ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 29.)".

Sostuvo que, al haberle transferido dinero a S P C a través del sistema financiero internacional, a cambio de recibir divisas en efectivo en el país, A y M P hicieron un aporte para convertir dinero físico de procedencia ilícita en sumas depositadas en una cuenta bancaria.

Alegó que "...aun cuando fuese cierto que el dinero de los P tuviera justificación en su actividad comercial lícita, ello no obstaría a la concretización del resultado de peligro concreto (...) es decir la posibilidad de que la conducta en cuestión genere apariencia de lícitud respecto de dinero que era ilícito...".





## Poder Judicial de la Nación

Indicó que los imputados eran personas que habían reconocido dedicarse a la actividad comercial y societaria tanto en el ámbito local como en el extranjero y que por lo tanto contaban con un nivel de experiencia en los negocios que habilitaba a exigirles una mayor prudencia a la hora de realizar transacciones económicas.

Afirmó que "...[e]xisten por tanto suficientes indicios que permiten a esta parte concluir sobre el acabado conocimiento que tenían (...) sobre lo marginal de la operación que eligieron realizar en numerosas oportunidades, resultando indistinto que se conocieran o no con S P C o supiesen acabadamente el destino que éste le daría al dinero recibido".

Aseveró que la figura del lavado de dinero admitía el dolo eventual y que, frente a una valoración global de las diferentes maniobras, no podía concluirse en la falta de configuración del tipo subjetivo. En tal orden, puntualizó que las transferencias cuestionadas se realizaron en repetidas ocasiones, utilizando sociedades *off shore* como personas interpuestas y que posibilitaban el ocultamiento del real dueño del dinero y que, a cambio de las remesas, A y M P obtuvieron la entrega de importantes sumas de dinero en efectivo y sin justificación alguna.

Sintetizó que "...los hermanos P no podían desconocer que existían numerosas cuestiones que indicaban que se estaban llevado a cabo maniobras de lavado de dinero...".

Consideró que el contenido de las declaraciones de los imputados no había sido sometido a crítica ni se había verificado si tenía correlato en el plano fáctico. Recordó que los causantes declararon haber realizado las





## Poder Judicial de la Nación

transferencias por una necesidad de contar con divisas, de las que no podían hacerse a partir de restricciones cambiarias. Estimó que la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico no evaluó la normativa de la especie vigente en la época de los hechos y afirmó que, al menos hasta el año 2011, no regía ningún tipo de restricción en el sentido invocado por los imputados.

Por otro lado, puso de resalto que "...ya en la instancia recursiva que dio origen a la resolución del 26/09/19 que dispuso el sobreseimiento de los hermanos P , en el recurso de apelación de la U.I.F. se incluían agravios que iban más allá de la posible evasión (...), entiendo que las maniobras de realizadas formaban parte de la maniobra de lavado de activos ejecutada por C S P y P ...". Preciso que el representante del Ministerio Público Fiscal, en su presentación del 12/9/23, sostuvo igual hipótesis.

Indicó que dichos argumentos no fueron contemplados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en la decisión del 26/10/20, que revocó los sobreseimientos de A y M P y dispuso dar intervención a la A.F.I.P. para que determinara si existió una maniobra de evasión tributaria como posible ilícito precedente.

**III.** Ahora bien, tomando en cuenta la teoría del caso expuesta por la recurrente, corresponde tener en consideración que, de acuerdo con el texto del art. 20 inc. 14 de la ley 25.246 en su redacción originaria (B.O. del 10/5/00, vigente hasta su reforma por la ley 26.683, B.O. del 21/6/2011), los importadores y exportadores eran sujetos obligados y debían cumplir con los deberes de información del art. 21 del mismo plexo normativo.





## Poder Judicial de la Nación

Según lo han referido en sus declaraciones indagatorias A y M P, al menos entre los años 2009 y 2015, tenían como actividad principal la realización de operaciones de comercio exterior.

Si bien no surge de las constancias de la causa si los nombrados se encontraban efectivamente inscriptos en los registros pertinentes, sea a nombre propio o a través de personas jurídicas, sí se trata de un extremo relevante, que debe ser elucidado y que, sopesado en forma conjunta a los restantes puntos indicados por la recurrente, podrían permitir arribar a mayores precisiones sobre el encuadre que debe darse a las conductas de A y M P.

En efecto, es dable reiterar que la impugnante invocó ciertos caracteres que rodearon a las remesas de dinero efectuadas -...*interposición de sociedades off shore; el ocultamiento del real dueño del dinero; (...) la entrega en efectivo de importantes sumas de dinero sin justificación alguna...*”, además del carácter reiterado de las operaciones (un total de 19 transferencias, por aproximadamente U\$D 900.000)- que justifican profundizar la pesquisa en la dirección apuntada.

En tal sentido, la Unidad de Información Financiera requirió que el contenido de las declaraciones de los imputados fuera sometido a crítica y que fuera verificado si lo manifestado tenía correlato fáctico. En igual orden, aseveró que entre los años 2009 y 2011 no existían las restricciones cambiarias aludidas por los imputados como factor determinante para que recurrieran a M Á P como intermediario y a la utilización de transferencias bancarias en una jurisdicción extranjera, mediante sociedades sin actividad comercial revelada y cuyos accionistas tampoco estaban declarados ante las





## Poder Judicial de la Nación

autoridades estatales, para finalmente hacerse de dinero físico en la Argentina por una vía informal y ajena al mercado único y libre de cambios establecido por el dec. 260/02.

Los aspectos no aclarados que han sido enunciados, aparecen como conducentes y podrían arrojar luz sobre el carácter que corresponde asignarle a los actos por los que se formuló reproche contra A y M P, pero, según surge de las constancias de la causa, no obran aún elementos suficientes para su respuesta. De tal modo, lo que existe en este momento es un cuadro de duda, habiéndose planteado cuestiones pertinentes para su esclarecimiento que no han sido atendidas, todo lo cual impide que se dé por agotada la encuesta.

Así, no pudiendo arribarse al estado de certeza negativo que es demandable para justificar el sobreseimiento que ha sido dictado, corresponde revocar la resolución recurrida y su antecedente necesario y ordenar a los órganos jurisdiccionales de procedencia que continúen la pesquisa en el sentido indicado.

**IV.** Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la querellante Unidad de Información Financiera, revocar la resolución recurrida y su antecedente necesario y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que se proceda conforme a lo aquí dispuesto, sin costas (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

El **señor juez Gustavo M. Hornos** dijo:

**I.** Que por coincidir en lo medular con las consideraciones expuestas en el voto del señor juez Javier Carbajo, habré de adherir a la solución propuesta de hacer lugar al recurso de casación interpuesto.





## Poder Judicial de la Nación

Es que, la decisión adoptada por la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico de esta ciudad que confirmó el sobreseimiento de S P y de M F P en orden al hecho por el que fueran indagados, se presenta -en relación con los elementos y constancias obrantes en la causa- al menos prematura.

En efecto, el impugnante expuso fundadamente que, en el estado actual en el que se encuentra la causa, no es posible el dictado de una solución liberatoria como la adoptada, describiendo que se ha puesto fin al proceso mediante un estudio que no ha abarcado la completa dimensión de los elementos obrantes en autos.

El caso traído a estudio debe ser analizado y valorado desde una mirada que se compromete con los derechos que el caso involucra, tomando en cuenta principalmente los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de lavado de activos.

Ya he sostenido que en los casos en los que se investigan y juzgan maniobras relacionadas con el lavado de activos, se requiere de investigaciones intensas por la calidad del delito en cuestión, debiendo la justicia garantizar el debido desarrollo del proceso penal (cfr. mi voto en causa "CHAVEZ, Ramón Alejandro y otro/recurso de casación" de esta Sala IV, reg. 2036.19, rta. el 10/10/2019, y causa causa CFP 14619/2007/TO3/4/CFC15 "TEGLI, Lorena Verónica s/recurso de casación", Reg. 764/2022, rta. el 14 de junio de 2022, entre varias otras).

Se trata de un delito en cuya esencia se encuentra la contingencia de la existencia de fondos por fuera del sistema financiero, circunstancia que se erige también como un factor objetivo sujeto a consideración.





## Poder Judicial de la Nación

En ese sentido no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado. En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del Lavado de Activos en forma oportuna y eficaz es fundamental (cfr. en lo pertinente causa "ZACARÍAS, Jorge Roberto"; reg. 2004.20, rta. el 9/10/2020, entre otras).

Es por ello mismo que nuestro Estado se ha comprometido a la lucha contra el lavado de dinero, al haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo, y que, también en cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo, ha adherido a las cuarenta recomendaciones del "Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux" (GAFI)".

De tal forma se presenta sustancial garantizar la efectividad del debilitamiento de esta amenaza consolidando, en lo pertinente al caso que nos ocupa, los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, el lavado del producto del delito; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país con la comunidad internacional.

Se trata de mantener una estrategia eficaz que permita ordenar el esfuerzo estatal en esta materia. Lo que, como se adelantó, torna necesario en la etapa que nos





## Poder Judicial de la Nación

ocupa: **la de investigación judicial, juzgamiento y represión del delito de lavado de activos, la interpretación normativa que implique un mayor aseguramiento de la implementación de procesos judiciales que resulten eficaces a ese fin** (cfr. en lo pertinente mi voto causa CIS María Julia reg. 1128.22.4 rta. el 29 de agosto de 2022).

Así, debe considerarse que el objeto de la pesquisa está constituido por hechos complejos que deben ser analizados dentro de un único contexto sin que pueda, a esta altura del proceso, descartarse la configuración del delito de lavado de activos.

Lo expuesto no resulta antojadizo sino que es consecuencia de la misma interpretación que le ha dado hasta el momento quienes han intervenido en el proceso a los hechos investigados en autos.

En efecto, cabe recordar que los encausados han sido indagados por haber integrado una estructura mediante la cual se habrían adquirido, administrado y vendido bienes, como así también transferido y canalizado importantes sumas de dinero hacia el extranjero, todos ellos provenientes de un origen espurio.

En ese orden, se advierte que para descartar la imputación de lavado de activos, se ha apelado a circunstancias que, como bien se describe en el voto que me antecede, aún no han sido esclarecidas por la instrucción.

En efecto, de las constancias de la causa surgen elementos que "a priori" permiten acompañar la hipótesis de la querella y, teniendo especialmente en cuenta el estadio procesal de la causa, el dictado del sobreseimiento resulta, como se adelantó, prematura e inconveniente.





## Poder Judicial de la Nación

Recordemos que el investigado se trata de un delito complejo que requiere de investigaciones intensas.

Así, estudiados las constancias obrantes en el presente proceso y las específicas circunstancias y argumentos desarrollados por el ahora recurrente en la presente causa y en la impugnación interpuesta ante esta instancia, corresponde a la instrucción adoptar las medidas que estime conducentes a fin de agotar la investigación.

En este contexto y luego de un examen de la cuestión planteada por la querella de acuerdo a las constancias de la causa, el sobreseimiento dictado en las presentes actuaciones luce desconectado argumentalmente de la controversia jurídica planteada, y evidencia falta de exhaustividad en el análisis de las constancias arribadas al proceso. Estas falencias contradicen los fines previstos por la ley para el dictado de este tipo de resoluciones, esto es la certeza sobre el acaecimiento o no de un determinado hecho o suceso histórico, para que el juzgador pueda con la debida convicción emitir un juicio asertivo, una afirmación y no una mera suposición o conjetura sobre la adecuación o no de esa realidad histórica a una figura delictiva (causa Nro. 1468 "Santos, Enrique José s/recurso de casación", Reg. Nro. 2231, rta. el 22/11/99; causa Nro. 2184 "Pawly, Alberto Oscar s/recurso de casación", Reg. Nro. 3065, rta. 19/12/2005; causa Nro. 7906 "Morel, Pedro s/recurso de casación", Reg. Nro. 12.686, rta. 26/11/2009, entre otras).

Es que, tal como señalé en los precedentes citados, el sobreseimiento exige un estado de certeza sobre la existencia de la causal en que se fundamenta, y procede cuando al juzgador no le queda duda acerca de la extinción de la pretensión penal, de que el hecho no se cometió o no





## Poder Judicial de la Nación

encuadra en una figura legal, que el delito no fue cometido por el imputado o de su falta de responsabilidad; supuesto que no se constata en autos.

Por el contrario, las cuestiones que el *a quo* pretendió tener por acreditadas a fin de dictar la resolución aquí impugnada se presentan controvertidas y deben ser suficientemente analizadas a la luz de las pruebas obrantes en la causa y del resultado que pudieran arrojar aquellas medidas aclaratorias señaladas en el voto del juez Javier Carbaño, permitiendo de este modo esclarecer lo ocurrido previo resolver la situación procesal de los encausados.

**II.** Por lo expuesto, adhiero a la solución propuesta de hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la querella (UIF), revocar la resolución recurrida y su antecedente necesario y remitir las actuaciones a la instancia de origen para que se proceda conforme a lo aquí dispuesto, sin costas en la instancia (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

Por ello, en virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría, **RESUELVE:**

**HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por la querella (UIF), **REVOCAR** la resolución recurrida y su antecedente necesario y **REMITIR** las actuaciones a la instancia de origen para que se proceda conforme a lo aquí dispuesto, sin costas en la instancia (arts. 530 y ccdtes. del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase al tribunal de origen - que deberá notificar personalmente al encausado de lo aquí decidido- mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.





Poder Judicial de la Nación

**Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.**

**Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.**

